

debe entender en tales términos que nunca viole las garantías constitucionales; que de autos aparece que el C. Tesorero municipal sin sujetarse al convenio que la Señora probó había celebrado con el ayuntamiento para el pago, usó violencia en el cobro y faltó á los requisitos que las mismas leyes determinan. Por estas consideraciones y con fundamento de la parte conducente de los artículos 14 y 17 de la Constitución general de la República, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Jesus Alarcon de Moncada contra los procedimientos del Tesorero municipal de Cuernavaca, en el cobro de la cantidad que la Señora adeuda á las rentas municipales.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México Diciembre 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. José María de Manero y Embides, contra las resoluciones del Gobierno general, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic.

José María de Manero y Embides, Juez segundo suplente del Juzgado de Distrito de este Estado, solicita amparo y proteccion contra disposiciones dictadas por el Supremo Gobierno, que le violan las garantías que le concede el artículo quinto de la Constitución federal, porque esas disposiciones le restringen el derecho que tiene á ser indemnizado de su trabajo personal en todos los negocios y causas de que ha conocido y deba conocer por impedimento legal ó recusacion del Juez propietario y primer suplente, toda vez que solo se acordó el pago de las cuentas de sus derechos devengados en los negocios civiles de que conoció por recusacion de su antecesor en el conocimiento, quedando insolutas las demas que tuvieron su origen de los otros negocios y causas y aun de los juicios de comiso que no deben considerarse sino como civiles, supuesto que las incidencias criminales se deben seguir por cuerda separada como previene el reglamento vigente; alegando tambien en su favor, que no disfrutaban los suplentes sueldo alguno como lo tiene asignado el propietario.

Pedido el informe correspondiente al C. Jefe Superior de Hacienda del Estado, que es el ejecutor de los actos reclamados, lo ha emitido de conformidad con los hechos que se han reclamado en el curso, y á los documentos presentados por los promoventes, que contienen las Órdenes supremas libradas por el Ministerio de Justicia, con motivo del cobro hecho por conducto de la misma Jefatura, faltando solamente hacer constar en autos los términos de la Suprema Circular de 7 de Diciembre de 1870, que puede mandarse agregar en copia.

Evacuado el traslado que del escrito se ha corrido, el infrascrito debe manifestar, que en su concepto la expresada circular y las Órdenes libradas últimamente para el pago de los derechos devengados por el quejoso, no están de acuerdo con la prevencion constitucional del citado artículo quinto, que en lo conducente dice: "Nadie puede

ser obligado á prestar trabajos personales, sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento;" siendo de notar, que la ley orgánica de 22 de Mayo de 1834, sobre los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en su artículo 31 concede á los suplentes la facultad de cobrar sus derechos en los casos en que conforme al artículo 29 conozcan por recusacion ó impedimento legal del Juez propietario, sin hacer distincion alguna respecto de negocios y causas criminales, porque se expresa en términos genéricos el citado artículo 29.

Y como la mencionada circular y órdenes citadas limitan ese derecho á solo los casos en que conozcan de negocios civiles por recusacion del Juez propietario, negándolo en los demas que se ofrecen frecuentemente por impedimento legal en los propios negocios civiles, y por excusa ó recusacion en las causas criminales, resulta que el quejoso ha sufrido la violacion de que se queja, porque no se indemniza como es de justicia su trabajo personal, como Juez suplente en los negocios y causas que se han indicado, contra lo prevenido en el artículo quinto Constitucional.

Antes de expedirse la Constitucion de la República, los Jueces suplentes cobraban costas al que resultaba condenado á satisfacerlas en el juicio, porque nunca han tenido sueldo; pero despues de promulgada, por la abolicion de aquellas, se dictó la Suprema Circular de 7 de Diciembre de 1870 relativa á convinar la disposicion Constitucional contenida en el artículo 17, con los artículos 29 y 31 de la citada ley orgánica, limitándose á resolver los casos en que los suplentes conozcan por recusacion, y haciendo punto omiso de los demas con, perjuicio de los interesados, aunque sin hacer distincion en cuanto á los asuntos que debieran someterse á su conocimiento; y las órdenes posteriores que en copia presenta el solicitante, tienen por objeto limitar el pago de los derechos exclusivamente á los casos de negocios civiles de recusacion, no obstante

TOMO IV.—PARTE II.

que en la exposicion que dirigió el segundo suplente al Ministerio de Hacienda en 38 de Diciembre último, le ha demostrado que tiene derecho á ser pagado en todos los negocios sin haber podido obtener resultado favorable.

Por cuyos fundamentos legales, el suscrito Promotor, cree de su deber pedir á ese Juzgado como lo verifica, que se sirva acceder á la solicitud del C. Lic. Manero y Embides, por considerarla de estricta justicia.

Heroica Veracruz, Junio 30 de 1873.—
Lic. J. M. Lopez de Escalera.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Veracruz, Julio 12 de 1873. Visto este juicio de amparo y proteccion promovido por el C. Juez segundo suplente de Distrito de este Estado Lic. José M. de Manero y Embides, por creer violada en él la garantía individual que concede el artículo quinto de la Constitucion de la República con las disposiciones del Supremo Gobierno, relativas á la negacion del pago de los honorarios devengados en los negocios en que como tal suplente ha conocido, permitiéndole tan solo el cobro de los que le corresponden por los asuntos civiles; los documentos que como comprobantes acompaña á su ocurso respectivo; el informe emitido por el C. Gefe Superior de Hacienda, lo pedido por el C. Promotor fiscal y

Considerando que el artículo constitucional citado previene en efecto, que á nadie se puede obligar á prestar trabajos personales sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento; que aunque en el caso de que se trata los trabajos impendidos tanto en los asuntos en que segun aquellas disposiciones se le permite el cobro de honorarios, como en aquellos en que se le niega, son trabajos personales de una misma naturaleza; que si estos trabajos no están com-

petente y justamente retribuidos, en sentir del quejoso, tampoco ha sido obligado á prestarlos en el sentido que revela el artículo constitucional que se dice violado, puesto que las disposiciones supremas á que se refiere no le han coartado en manera alguna la libertad que tiene para prestarlos ó no, continuando en el despacho de los negocios ó renunciando su empleo; que esta misma libertad en que se encuentra para eximirse de esa obligacion que cree tener impuesta para prestar sus servicios como segundo suplente de este Juzgado de Distrito, demuestra, que no hay coaccion alguna moral ni material que lo force á trabajar sin la justa compensacion de sus servicios; que por lo tanto en manera alguna puede admitirse que en el caso de que aquí se trata se haya violado el citado artículo quinto de la Constitucion, y por consiguiente ni la garantía individual otorgada por él con cuanto mas ver y considerar convino, de conformidad con las prescripciones de la ley de 20 de Enero de 1869 y de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general, este Juzgado falla:

Primero: la justicia de la federacion no ampara ni protege al C. Lic. José M^o de Manero y Embides, Juez segundo suplente de Distrito de este Estado, contra las disposiciones supremas que le niegan el pago de los emolumentos que cree le corresponden en los asuntos en que, como tal suplente, ha intervenido.

Segundo: notifíquese este fallo; sáquense las copias prevenidas por la ley para su publicacion en el periódico "El Progreso" y para el Semanario Judicial de la Federacion y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Así lo proveyó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado: lo testificamos.—*Lic. Luis y Gomez.*—De asistencia.—*José M^o Gonzalez—Vicente Simancas.*

Es copia. H. Veracruz, Julio 17 de 1873.—*Lic. Luis y Gomez.*—*José M^o Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 8 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. José María de Manero y Embides, contra las resoluciones del gobierno general, por las que niega tener derechos al pago de los honorarios que cree haber devengado como Juez segundo suplente de Distrito, en los negocios en que ha conocido por impedimento del Juez propietario, ó por recusacion de este, siendo de comiso: cuyas resoluciones violan en concepto del quejoso, la garantía que contiene el artículo 59 de la Constitucion federal.

Considerando: que no aparece que se haya obligado al Lic. Manero á desempeñar el cargo de segundo suplente de Distrito; por lo que no se puede afirmar que haya violacion del artículo 59 Constitucional que previene que á nadie se puede obligar á prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y sin la justa retribucion. Y que si el quejoso aceptó dicho cargo, en la inteligencia de que le debian ser retribuidos sus trabajos, cualquiera que fuese la naturaleza de los negocios de que conociera, y cree que no hay justicia por parte del gobierno general en negarle esta retribucion, tiene su accion expedita para hacerla valer en el juicio correspondiente.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 12 de Julio del presente año, que declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Lic. José María de Manero y Embides, Juez segundo suplente de Distrito en el Estado de Veracruz, contra las disposiciones supremas que le niegan el pago de los emolumentos que cree le corresponden en los negocios en que como tal suplente ha intervenido.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Závala.*—*José García Ramirez*, secretario.

Escopia que certifico. México, Noviembre 25 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro y otros, contra los actos del Administrador de la Aduana Marítima del mismo puerto que les aseguró unos efectos por pago del impuesto federal llamado derecho de bultos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los señores que suscriben el ocurso de fojas dos á cinco, solicitan amparo de los actos del Sr. encargado de la administracion marítima de éste puerto, quien exigiéndoles el derecho de bultos les detuvo, para asegurar las mercancías expresadas con especificacion en la nómina que acompañan y es la conque dá principio este expediente.

La Administracion en su informe confiesa el motivo de la queja: y este Ministerio

al evacuar el traslado, cumple á su deber: reproducir lo alegado y hecho valer en los juicios de amparo promovidos recientemente por los Sres. San Roman y Armendaiz y fallados, el uno el 17 de Julio y el otro el 22 del mismo mes próximo pasado; porque en su concepto no es legal ni debido el que se siga celebrando ese derecho de bultos desde que comenzó á regir el nuevo Arancel, fundado en la vigencia clara, terminante y expresa del artículo primero del decreto de 17 de Marzo de 1858 ó sea la ley 30 de Julio de 1861; en la circular de primero de Enero de 1872 á su fin; en el artículo segundo de los transitorios del Arancel; en el Reglamento de Aduanas, vigente, art. 214; en la ley del presupuesto del año económico vencido el 30 de Julio último, artículos primero y dos, y en los telégramas del Gobierno, revestido de facultades legislativas, de 24 de Setiembre y 4 de Diciembre del año pasado.

Por tanto, en justicia debe fallarse: que la justicia Federal ampara y protege á los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodriguez y las razones sociales de Luis Viscaya y Compañía y Liaño y Barrera, contra los actos del señor encargado de la Administracion marítima y fronteriza de este puerto, quien al importar aquellos para la zona las mercancías amparadas con sus respectivos permisos, les exigió el derecho de bultos y les detuvo efectos para su pago.

H. Matamoros, Agosto 8 de 1873, á las tres y tres cuartos de la tarde.—*Lic. Agustín Menchaca.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Matamoros, Agosto 20 de 1872. Vistos los presentes autos, y en ellos el escrito de fojas 2 en que los Sres. H. Nielssen, Casimiro Castro, M. Abascal, M. H. Croos,